

Perspectivas económicas de Argentina para 2025

Encuentro de Reflexión Política
19 de Diciembre de 2024
Buenos Aires



Perspectivas Económicas de Argentina para 2025

Tomás Raffo

15/12/24

A modo de introducción: El “logro” de bajar la inflación

Imaginar como va a ser el año 2025 en materia económica es un ejercicio de carácter intelectual como muchas probabilidades de inexactitud. Lo azaroso es por definición inimaginable. La incertidumbre forma parte de todo pronóstico. No obstante sí se puede, y es un ejercicio deseable, proyectar lo que puede ocurrir en materia económica si persisten las tendencias que están vigentes en este terreno. Se trata de ubicar algunas tendencias centrales que hoy se observan en el terreno económico, y suponiendo su reproducción, extraer las conclusiones que de ellas se derivan, asumiendo la imposibilidad de prever lo imprevisto y azaroso que todo futuro conlleva.

Con estas salvedades se puede realizar este ejercicio de imaginación situada, a partir de lo que está ocurriendo en la economía a partir de la asunción del nuevo gobierno. El primer año del gobierno de Javier Milei estuvo caracterizado por un brutal ajuste en las condiciones de vida de la población, impulsado por una devaluación inicial del 118% que provocó que la ya elevada tasa de inflación mensual del 12% se duplicara al 25% en diciembre de 2023. Este proceso prehiperinflacionario, auto-generado deliberadamente por el nuevo Gobierno para disciplinar a la sociedad, tuvo dos componentes adicionales al devaluatorio: por un lado la liberalización de los precios internos que fue aprovechado por las empresas con poder de mercado que abusaron de su posición para llevar adelante brutales remarcaciones de precios en alimentos y otros bienes salarios (indumentaria, medicamentos,) y por otro, en el marco de un brutal ajuste del gasto público, se adicionaron el efecto que tuvieron las eliminaciones en los subsidios de las tarifas de servicios públicos, que derivaron en verdadero tarifazos que incrementaron en promedio un 400% por las facturas de gas, agua, luz, y transporte. Una inducción deliberada de incrementar al máximo posible la tasa de inflación fue el primer objetivo de la política económica del nuevo gobierno, que se logró con 3 instrumentos: devaluación, liberación de precios y tarifazos. Obviamente el resultado fueron pingües ganancias para las grandes empresas monopólicas, exportadoras y concesionarias de servicios públicos, al costo de un incremento significativo de la pobreza la indigencia, derivados de la caída salarial, de los ingresos de los planes sociales, y también del aumento del desempleo.

Logrado este objetivo, cuya narrativa era la de que estábamos al borde de la hiperinflación por culpa del anterior gobierno y su política fiscal (y no por las medidas expresas que había tomado el nuevo gobierno), se abonó el terreno para llevar adelante una de las facetas más crueles y aberrantes que el nuevo gobierno había prometido en campaña: la motosierra del gasto público amparada en el supuesto de que “no hay plata”. La convalidación social que tuvo esta propuesta al ser elegido presidente es la que permitió, en el marco de una exacerbación de

la inflación causada por el nuevo Gobierno pero atribuida al anterior, justificar un recorte brutal en las partidas del gasto público por la vía de prácticamente congelar, en algunos casos directamente eliminar y en otros dar aumentos muy por debajo de la elevada inflación producida, lo que determinó un ajuste en el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, los planes sociales, los salarios de toda el Estado Nacional, la eliminación de programas de salud (quitando prestaciones a enfermos oncológicos y los jubilados del PAMI), la reducción drástica de las transferencias a las provincias para tener de rehenes a los gobernadores e involucrarlos en su estrategia política, el recorte brutal a las universidades, y a la educación pública en general, los despidos en el Estado conjuntamente con la paralización de la obra pública.

Toda esta política de ajuste del gasto público, correlativa a la crueldad manifiesta del Presidente, tuvo como efecto principal, más allá de la agresión a las condiciones de vida de los sectores populares, la inducción del achicamiento de la demanda interna del sector público, la que agregada al ajuste en el sector privado, vía aumento de los precios de los insumos oligopólicos, importados y tarifarios, derivaron en un achicamiento brutal del mercado interno, y en este marco de menor actividad interna se posibilita la desaceleración de la caída en la tasa de inflación, que pasó del 25% inicial al 3% actual, y es presentada como el gran logro del Gobierno Nacional. Pero sin contar no sólo el efecto de empobrecimiento del (40% al 50% de pobreza en un año, casi 4,5 millones de pobres más) a que dio lugar la política de inducir la inflación, sino a los efectos recesivos que tiene achicar la demanda interna, con despidos, cierre de empresas, y un incremento en la concentración de las empresas oligopólicas.

El supuesto logro de bajar la inflación del Gobierno reconoce dos etapas precisas: primero haber inducido un crecimiento exorbitante de la misma; la segunda promover un proceso recesivo en materia de demanda interna. Esto tiene como consecuencia que mantener la baja en la tasa de inflación depende de mantener el proceso recesivo, y eso supone que no hay crecimiento económico endógeno.

¿Se puede mantener la baja de la inflación? Que implicancias tiene? Las preguntas del 2025

En este marco, el primer interrogante a plantearse en el 2025 es si podrá persistir la caída en la tasa de inflación o mantenerse en niveles bajos. En ambos casos, para que eso ocurra es condición de que no se verifique un proceso de crecimiento económico, principalmente motorizado por causas internas. Es cierto que la primer causa interna que pueda promover un crecimiento económico, el Gobierno Nacional, parece improbable que lo lleve adelante: que es la demanda interna del gasto público, aumentando salarios, jubilaciones y obra pública. Parece que es muy probable, y aún en un año electoral que el Gobierno no quiere apelar a este mecanismo. Volveremos sobre este punto, pero lo que es necesario remarcar es que incluso un crecimiento motorizado por las exportaciones, cuyo destino principal es acumular divisas para el pago de intereses y fuga de capitales, puede

eventualmente traducir en mínimas operaciones de inversión, para reposición de maquinarias, e incluso de consumo superior (renovar el parque automotor) que siquiera mínimamente tienen un efecto en la demanda interna. Para que la inflación siga su tendencia a la baja o se mantenga en este nivel es necesario incluso que este mínimo de tracción que supone las exportaciones sea absolutamente marginal. Dicho de otro modo, cualquier repunte económico es pasible de ser traducido en aumentos de la inflación, máxime porque la baja que experimentamos se realizó sobre un proceso recesivo que agrava una de las causas principales de la inflación, a saber: la concentración económica. Por ende, una estructura aún más concentrada que la que teníamos está en mayor capacidad de capturar cualquier reactivación económica por la vía de aumentar los precios antes que de expandir su nivel de actividad.

Pero por otro lado, hay otra política que atenta contra el mantenimiento de la baja en la tasa de inflación; y es la política de tarifazos de los servicios públicos que el gobierno llevó adelante para beneficio de las empresas privatizadas (Metrogas, Edenor, Edesur, Emova, ex Metrovías, etc). Para que la tasa de inflación se mantenga baja es necesario que no se verifique los tarifazos exorbitantes del 2024, pero a su vez este aumento de tarifas cumplió una doble función para el gobierno: garantizarle rentas extraordinarias a esta fracción del capital concentrado, pero por otro lado y fundamentalmente son importantísimas para sostener el costo local elevado, y con ello garantizar el achicamiento económico que la recesión necesita para que los precios no aumenten. Parece ser éste un callejón sin salida para el Gobierno: si no aumentan las tarifas, la inflación puede mantenerse baja, pero se puede promover cierta recuperación económica local que haga que el incremento de la actividad se traduzca en aumento de precios, pero apropiado por otra fracción del capital concentrado (los vinculados con el consumo interno); y por otro lado, si repite la política de tarifazos, beneficiando nuevamente al capital concentrado que participa de estas empresas, alimenta las posibilidades de un aumento inflacionario. En conclusión, se trata de una trampa derivado de la política recesiva que el gobierno llevo adelante para mostrar el supuesto logro de bajar la inflación, cuando sólo hizo agravar las condiciones en las que está emerge: la consolidación de un entramado empresario y productivo de elevada concentración de capitales. En esta condiciones parece probable la convivencia de aumentos tarifarios no tan elevados como los que ya tuvimos, pero que sostengan e incluso puedan aumentar la tasa de inflación vigente.

Por otro lado, la baja en la tasa de inflación también requiere que el gasto público siga una tendencia contractiva. No sólo por el ajuste que ya se realizó, sino porque la política recesiva del Gobierno es una espiral para abajo que se retroalimenta. En efecto, la caída brutal del gasto público, al impactar achicando el mercado interno, junto con las otras medidas recesivas, produce un impacto preciso deteriorando la caída de la recaudación tributaria. Esta caída de recaudación presiona nuevamente al gasto público a la baja, y este nuevamente vía la inducción a la recesión, impacta deteriorando nuevamente la recaudación. Situación análoga a la trampa del Ajuste Perpetuo que vivimos como sociedad a partir de la crisis de la Convertibilidad desde el año 1998 hasta el estallido del 2001. Man-

tener baja la tasa de inflación pone en crisis al propio Estado Nacional, objetivo por cierto buscado por la actual gestión, pero también deteriorar al máximo las condiciones de vida de los sectores populares.

Pero hay otra dimensión relevante en la discusión de la baja en la inflación, dimensión por demás sensible para el Gobierno, los Sectores Dominantes y obviamente los Sectores Populares. Se trata de la dimensión cambiaria. El tipo de cambio estable es condición para que la tasa de inflación no crezca; más aún fue la devaluación inicial del Gobierno la que llevó a niveles hiperinflacionarios a la tasa. Ahora bien, desde que se devaluó brutalmente y hasta la fecha, y es esperable que el Gobierno pretenda para todo el 2025, la tasa de devaluación estuvo muy por debajo de la inflación (de febrero a noviembre el tipo de cambio estuvo por debajo del 20% y la inflación arriba del 55%). Es decir desde febrero a la fecha la tasa de inflación aún desacelerándose es más del doble que la modificación del tipo de cambio, por lo que las ganancias extraordinarias de los exportadores empezaron a reducirse respecto del momento de la devaluación. Es esta reducción de las ganancias extraordinarias las que se ocultan tras lo pedidos de la cúpula exportadora de mejorar el tipo de cambio: quieren nuevamente hacer que sus dólares de exportación se traduzca en un mayor poder de compra en el mercado doméstico. Al mismo tiempo, al no aumentar el tipo de cambio local y sí la inflación, los costos de producir y consumir en argentina se elevaron en dólares (y no los salarios); en este marco arrecian el impulso a las importaciones, que compitiendo con las empresas locales suelen derivar en menores ventas de éstas y consecuentemente una reducción de sus beneficios, y con ello la traducción en rebajas salariales e incluso suspensiones y despidos. En este marco, las empresas exportadoras, así como las que sufren la competencia de las importaciones e incluso algunas fracciones de los sectores populares (principalmente el vinculado con los sectores industriales) proponen un ajuste del tipo de cambio, es decir presionan a una devaluación. Pero esta devaluación tiene el primer efecto de aumentar la inflación doméstica, afectando a los trabajadores (aún los industriales), pero que sobretodo es resistida por el Gobierno Nacional, no por la defensa de los trabajadores sino para mantener su supuesto “logro” económico. Que en este caso sería doble: presentar una inflación a la baja y un dólar que no se mueve.

Por otro lado, la política de apreciación cambiaria que supone la estabilidad del tipo de cambio, conjuntamente la persistencia de la tasa de inflación (aunque en niveles más bajos) no es neutral en el esquema de negocios. Ella favorece principalmente los pagos en divisas a los acreedores (factores centrales del Poder Económico) y al mismo tiempo produce un verdadero festival de valorización financiera en el mercado bursátil para los especuladores que a través del arbitraje de bonos, acciones y dólar, logran realizar pingües ganancias en pesos con la variación de las cotizaciones, como por ejemplo da cuenta lo que ocurrieron con el mercado de bonos, que estaba al 25% de su valor al final del Gobierno de Massa (debido a la negatividad con el Gobierno anterior de los especuladores, a los que se les suele cubrir llamando “mercado”) y que hoy cotizan casi al 70%, encantados con la impronta desregulatoria y de combate frontal al Estado que represen-

ta Milei, para colmo favorecido por los gestos de acompañamiento mutuo con el reciente electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este incremento de las ganancias en pesos de activos que dada la euforia bursátil despegaron abruptamente en precios, permite que con el tipo de cambio estable, este supuesto “mercado” que no son más que un puñado de especuladores, realizan un valorización financiera en dólares exhuberantes. Al mismo tiempo y como un adicional, cuando los precios de los bonos suben, el impacto en la tasa baja y esto es lo que refleja la festejada caída en el denominado “riesgo país” celebrada por el establishment, los medios y el Gobierno como si fuera un indicador de su éxito y no refleja más que el resultado preciso de la especulación sobre los bonos de los que participan de este mercado.

Como se ve, mantener a la baja la tasa de inflación y no modificar el tipo de cambio supone un conjunto complejo de relaciones al interior de los bloques de poder y con impacto directo en las condiciones de vida de los sectores populares. En una coyuntura política medianamente “normal” era dable esperar que en un año electoral el gobierno nacional dispusiera de cierto “relajamiento” en su política de ajuste, pudiendo preverse aumentos en el gasto público en jubilaciones y pensiones, en salarios, en cierta recomposición de las transferencias a las provincias y aún en la obra pública. Pero con Milei, y a juzgar por sus recientes dichos, parece que no está dispuesto a aflojar nada su política fiscal, del mismo modo que no está dispuesto a modificar en nada el esquema cambiario. Es esperable entonces llegar al decisivo momento electoral, que aún no sabemos si será en las probables Paso en Agosto ó en las Generales de Octubre, la economía haya transitado un proceso recesivo, que si bien no reconoce un punto álgido como fueron los primeros meses del Gobierno, haga sentir fuertemente el deterioro en las condiciones de vida de los sectores populares vía el el congelamiento de ingresos, los probables aumentos de tarifas en los servicios públicos, y creciente-mente en la expansión del desempleo. Será el veredicto social de las elecciones el que determinará si esta tendencia se profundizará para lo que quede del 2025 y de la experiencia de este gobierno libertario, o una derrota contundente del gobierno en las urnas sea capaz de modificar este regresivo esquema de Política Económica.

En este contexto, surgen tres preguntas clave:

1. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una baja inflación basada en recesión y ajuste estructural sin provocar un colapso social?
2. ¿Es posible evitar una devaluación cambiaria significativa en un contexto de apreciación prolongada y tensiones externas crecientes?
3. ¿Las elecciones legislativas de 2025 serán un respaldo implícito al ajuste o marcarán el inicio de una modificación en la política económica del Gobierno?

Responder estas interrogantes será crucial para comprender el destino de la economía argentina y su impacto en la vida los sectores populares.